



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Decisión No. 122

Medellín, diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022).

El Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, procede a proferir el fallo dentro de este proceso ordinario promovido por **DORA LUZ YEPES HERNÁNDEZ** contra la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

A continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, según consta en el Acta No. 037 de discusión de proyectos, adoptado por los integrantes de la sala, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES, quien actúa como magistrado ponente, se procede a proferir la decisión de segunda instancia en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS

Manifiesta la demandante que era madre del joven Yeisson Martínez Yepes, quien falleció el 10 de diciembre de 2015 por causas de origen común, que su hijo era soltero, sin hijos, sin relación sentimental permanente, conviviendo con ella bajo el mismo techo, siendo la persona que velaba por su sustento económico, ya que su esposo había fallecido en octubre de 2011; continuó contando que su hijo en vida estuvo afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A., contando con 96.67 semanas cotizadas antes de su deceso, dejando consolidado el derecho pensional, razón por la cual solicitó la pensión de sobreviviente el

20 de septiembre de 2019, prestación que le fue negada con el argumento de que no estaba acreditado el requisito de dependencia económica.

1.2. DE LAS PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos solicita se declare que su hijo dejó causada la pensión de sobrevivientes, y que como consecuencia de ello se le reconozca la prestación como beneficiaria en su calidad de madre dependiente, retroactivo desde el 10 de diciembre de 2015, intereses moratorios regulado del artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 o subsidiariamente la indexación de las condenas y costas procesales a cargo de la demandante.

1.3. DE LA RESPUESTA

El apoderado de la demandada **PROTECCIÓN S.A.**, respondió a los hechos indicando que es cierto que el señor YEISSON MARTÍNEZ falleció el 10 de diciembre de 2015 siendo afiliado a Protección S.A., que la demandante solicitó ante la AFP Protección el reconocimiento y pago de la pensión de veje, negándose la prestación; en cuanto en los hechos restantes manifestó que no le constan o no son ciertos. Se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones y propuso las excepciones de: FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS, BUENA FE, COMPENSACIÓN Y PRESCRIPCIÓN.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 08 de julio de 2021, CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a pagar a la señora DORA LUZ YEPES HERNÁNDEZ la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo YEISSON MARTÍNEZ YEPES, en cuantía del salario mínimo legal mensual vigente, con un retroactivo pensional liquidado desde el 20 de septiembre de 2016 hasta julio del 2021 inclusive. CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a pagar los intereses moratorios causados desde el 21 de noviembre de 2019 hasta el momento efectivo del pago; AUTORIZÓ a PROTECCIÓN S.A. a realizar los descuentos con destino al sistema de seguridad social en salud; DECLARÓ parcialmente probada la excepción de prescripción. COSTAS a cargo de PROTECCIÓN S.A. y en favor de la parte demandante.

1.5 IMPUGNACIÓN

Recurrió la decisión el apoderado de PROTECCIÓN S.A. en contra de la totalidad de la sentencia, solicitando su revocatoria con el argumentó que no existía una dependencia económica de la señora Dora Luz con su hijo el causante Yeisson Martínez, pues se evidencia que la demandante contaba con diversos ingresos económicos, esto es el de su pareja y el de otros hijos, compartiéndose los gastos del hogar entre todos los que en el vivían, sin que los aportes realizados por el causante fueran determinantes para su subsistencia, así que al ser la ayuda una mera colaboración no se satisface el requisito para acceder a la prestación, como ocurre en este caso, donde los aportes del señor Yeisson no eran determinantes para subsistir en una vida digna, sino que la afectación se reduce a limitaciones de lujos, sin que existiera una merma en su mínimo vital, resaltando que la demandante era beneficiara en salud de su cónyuge, quien aportaba para su subsistencia. Así que la colaboración del fallecido Yeisson corresponde al apoyo de un hijo responsable con sus padres. Cita jurisprudencia relacionada, en la que se indica que la mera colaboración o ayuda, no es determinante para hablar de una subordinación económica.

Finalizó exponiendo el abogado que no fue posible determinar un monto del aporte económico realizado por el afiliado fallecido, sin que se pudiera tampoco determinar el aporte qué realizaba el cónyuge de la demandante, razones por las cuales solicita se revise detalladamente la prueba para aclarar cualquier duda que pueda generarse. En cuanto a los intereses moratorios indica que no existe lugar a los mismos, por no ser procedente la pretensión principal.

1.6 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Aportó oportunamente los alegatos el apoderado del fondo privado, quien reiteró lo expuesto en el recurso de alzada.

2. CONSIDERACIONES

Procede la Sala de Decisión a pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos por PROTECCIÓN S.A., advirtiendo que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, el estudio del fallo recurrido se limitará a los puntos de inconformidad.

2.1 PROBLEMA JURÍDICO

Se circunscribe el problema jurídico en esta instancia a establecer si se acredita por la demandante el requisito de dependencia económica establecido en el literal d) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, al reclamar la prestación en calidad de madre del afiliado fallecido.

2.2 HECHOS PROBADOS

Que la señora Dora Luz Yepes Hernández es la madre de Yeisson Martínez Yepes, como consta en registro civil de nacimiento inserto en el archivo denominado (01 Demanda fl.17); que el joven Yeisson Martínez falleció el 10 de diciembre de 2015 (01Demanda fls. 19); razón por la cual la señora Dora Luz, reclamó el 20 de septiembre de 2.019, la pensión de sobreviviente ante Protección S.A. (01Demanda fls. 39 a 41 - 05Contestación fls 39 - 41), administradora que le dio respuesta en comunicado del 22 de octubre de 2019, rechazando el requerimiento por no encontrarse acreditada la dependencia económica, sin embargo, le reconoció la devolución de saldos por valor de \$2´745.879 correspondiente a 103.43 semanas (01Demanda fls. 20 y 21- 05Contestación fls. 26 a 35). También reposa en la foliatura la investigación realizado por la empresa Valuative del 04 de octubre de 2019, en la que se concluyó que la actora no tenía derecho a la prestación analizando varios supuestos que más adelante se relacionaran (05Contestación.pdf fls. 42 -56). Por último, encontramos la historia laboral del afiliado fallecido, de la que se desprende que cotizó en toda su vida laboral un total de 102.71 semanas (01Demanda.pdf fls. 30 a 32 -05Contestación.pdf fls 36 a 38)

3.3. PARÁMETROS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES.

Pues bien, jurisprudencialmente se tiene establecido que la norma a observar para definir el derecho a pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del hecho que la genera, en el caso de estudio tenemos que el deceso del afiliado acaeció el 10 de diciembre de 2015, teniendo aplicación el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, norma que en el literal d) indica que a falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este, entendida la dependencia económica, bajo los términos de la sentencia C-111 del 22 de febrero de 2006; en relación con los requisitos para la causación de la prestación el artículo 73 remite al 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que entre otros relaciona a: 2.) los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisito satisfecho, pues de la aludida historia laboral se infiere que el joven Jeisson Martínez contaba con 83.14 semanas en los 3 años anteriores a su deceso (fls. 30 a 32).

Así las cosas, este cuerpo colegiado se centrará en el análisis de la dependencia económica de la demandante en calidad de madre del afiliado fallecido, ya que el apoderado de la accionada discrepa de la dependencia económica reconocida por la juez, pues considera que la misma no está probada.

Al respecto, resalta esta Corporación que la dependencia económica no requiere indefectiblemente de un estado de mendicidad o indigencia, bastando con acreditarse que la ayuda suministrada por el causante era determinante y constante, como lo destacó la sentencia C-111 del 2.006. En esta pieza jurisprudencial se establecieron unas reglas a partir del mínimo vital *cualitativo*, para ser beneficiarios los padres de la pensión de sobrevivientes de su hijo, y que puede ser aplicada en asuntos como el que se trata ahora.

Se indicó: 1. *"Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna; 2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica; 3. No constituye independencia económica*

recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993; 4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional; 5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes; 6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica” (Subrayas fuera del texto).

Y es que esta dependencia no debe entenderse como una sujeción total y absoluta a los ingresos que percibía el causante, de manera que no se excluye la existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas diferentes, pero en todo caso, debe existir un grado cierto de *dependencia*, que se ha identificado a partir de dos condiciones: **i)** *una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes;* **ii)** *y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.* Situación que ha sido analizada por nuestro órgano de cierre (Ver Sentencia de radicado Nro. 19.867 del 27 de marzo de 2003, reiterada en la de radicado Nro. 35351 del 21 de abril de 2009, así como en la SL400-2013, SL816-2013, SL2800-2014, SL3630-2014, SL6690-2014, SL 14923 de 2014 SL-6558-2017, SL4025-2018 y SL 1704 -2021).

Infiriéndose que la dependencia económica requerida por la ley, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: debe ser cierta y no presunta; la participación económica debe ser regular y periódica; y las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste.

Así las cosas, la *dependencia económica, debe ser de tal entidad que una vez fallecido el causante y extinguida la contribución económica hacia los posibles beneficiarios, la liquidez de éstos últimos se vea amenazada, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida.*

3.4. CASO EN CONCRETO

Teniendo de presente lo citado, analizaremos las pruebas que milita en la foliatura en aras de determinar si la demandante Yepes Hernández acredita el requisito de dependencia económica que a ella se le exige, encontrándonos en primer lugar que no existe duda del vínculo de consanguinidad que ató al afiliado fallecido con la demandante, quien es su madre, pues ello se colige del registro civil de nacimiento inserto a folio 17.

También encontramos acreditado que la accionante Dora Luz reclamó la pensión de sobreviviente, negándosele la prestación por parte del fondo privado, argumentando que no satisfacía el requisito de dependencia económica, acto seguido ordenó el pago de la devolución de saldos, por ser la accionante la beneficiaria de este derecho.

Acogiendo el fondo privado la citada decisión, ciñéndose en las conclusiones producto de la investigación suministrada por la empresa VALUATIVE el 4 de octubre de 2019, la cual fue anexada en la contestación de la demandada y en la que se indica que el señor Yeisson Martínez era de estado civil soltero, que su padre había fallecido y que al momento de su deceso su núcleo familiar estaba conformado por su madre, padrastro y cuatro hermanos; que los gastos del hogar eran asumidos por todos los ocupantes de la vivienda; asignando la cuota que le correspondía a Yeisson después de su fallecimiento, a los demás ocupantes.; sin embargo, analizando detenidamente ésta investigación contrario a lo concluido por la empresa, se vislumbra que efectivamente la persona encargada de la manutención de la señora Dora Luz era su hijo Yeisson, pues así lo declararon los testigos recaudados Yolima Pineda Martínez, Marilyn Del Socorro Martínez De Pineda, Ana Marjory Rivera Saldarriaga, Rosa Elvira Saldarriaga De Rivera, Ingrid Vanessa Rueda García Y Juan Eliseo Alferez Arbeláez, en calidad de familia, vecinos y amigos, quienes indicaron de manera uniforme que este joven era soltero y era quien además de aportar una cuota en el hogar, velaba por el sustento de su madre, quien no laboraba, situación que es factible corroborar con la demás prueba recaudada en la citada investigación. (Contestación fls. 42 a 56)

En cuanto a la prueba testimonial, tenemos que la activa trajo como declarantes al proceso a las señoras **LUZ MARINA RÍOS SÁNCHEZ**, quien manifestó que conoce a la señora Dora Luz Yepes Hernández, desde hace

aproximadamente 35 años en razón de amistad y vecindad, cuenta que la señora Dora tuvo 5 hijos, uno ya fallecido de nombre Yeisson, advirtiéndole que en vida de éste hijo, él era quien velaba por el sustento de la accionante, y que si bien Dora laboró en una empresa de zapatos, su hijo Yeisson apenas salió de la cárcel y consiguió trabajo, la hizo renunciar y se hizo cargo de ella; describe la declarante la casa de la señora Dora ubicada en un segundo piso, la cual cuenta con alrededor de 4 o 5 habitaciones y al final tiene un apartamentico en el que vive Dora, siendo la casa muy larga. Continuó contando que Dora es casada dos veces, el primer esposo don Osvaldo quién murió y el segundo don Leopoldo, de quien ya se separó porque era una persona de muy mal genio. Comentó que al momento del deceso de Yeisson, éste se encontraba laborando como administrador de una taberna y también vendía mercancía; dice que Yeisson era soltero y no tenía hijos, viviendo para el momento de su deceso con la madre, el padrastro y sus dos hermanas, quienes tenían esposos e hijos; que si bien la señora Dora vivía con el señor Leopoldo, este señor era tan difícil que no le ayudaba a Dora, por lo que era su hijo quien velaba por el sustento de ella, razón por la cual la relación entre Yeisson y Leopoldo no era buena, pues éste último humillaba mucho a la señora Dora. Cuenta que los otros hijos de la demandante, no aportaban para los gastos de Dora, porque todos tenían obligaciones familiares, sin embargo, advierte que en la casa de esta familia llegaba una sola cuenta de servicios y entre todos los que la habitaban la pagaban, al igual que la alimentación. Dice que después del deceso de Yeisson, la señora Dora empezó a cuidar a sus nietos y que por esa ayuda sus hijas le daban algún dinero, con lo que ella suplía parte de sus gastos, sin embargo su calidad de vida desmejoró, pues su economía es muy regular, la comida es escasamente lo necesario, sin que sea posible que se reintegre a la fuerza de trabajo ya que presenta quebrantos de salud, pues tiene problemas en las manos, rodillas y tiroides. Finalizó diciendo que los hechos que relata le constan directamente, siendo testigo de las veces que Yeisson le entregaba dinero a la señora Dora, sin saber con exactitud la cantidad.

Por su parte la declarante ROSA ELVIRA SALDARRIAGA, manifestó que conoce a la señora Dora Luz Yepes, desde hace más de 30 años, en razón de una amistad muy cercana; dice que Dora estuvo casada con Osvaldo quien falleció y con quién tuvo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres, uno

ya fallecido. Dice que Dora tuvo otro marido y ahí se alejaron como amigas porque el señor era muy jodido y les prohibió la amistad. Continuó contando que conoció a Yeisson el hijo de Dora, quién era soltero y no tenía hijos, viviendo para el momento de su muerte con su madre, el padrastro y las hermanas, en la casa materna, la cual describe como muy grande de cuatro habitaciones, contando en la parte de atrás con un apartamentico en el que vivió Dora y él que fue su esposo. Continuó expresando que en el último año de vida del joven Yeisson, éste trabajó en un restaurante o bar, y que con lo que devengaba le ayudaba económicamente a su madre Dora, dándole plata para el mercado y para las cosas personales; también expone que el marido de Dora velaba por el sustento de ella, sin embargo, advierte que el que más ayudaba a la demandante era su hijo. Cuenta la declarante que como en esa casa vivía tanta gente, las hijas compraban lo de ellas y su grupo familiar, y que a Dora la sostenía el hijo y el marido, sin que el marido le permitiera darle algo a las hijas, porque eso era un problema en esa casa. Dice que después de que muere el hijo y Dora se deja con el marido, empezó a cuidar los nietos y las hijas le pagaban, sin embargo, la economía le desmejoró, y a todos los demás hijos les tocó ponerse las pilas y ayudar. Concluye manifestando que conoce lo que declara porque le tocó presenciarlo, en razón de la amistad.

Encontrando esta Sala que la prueba testimonial resulta coherente, uniforme, con conocimiento directo de lo que relatan, ya que las testigos tuvieron una amistad muy cercana tanto con el causante como con la hoy demandante, siendo enfáticas todas en decir que la señora Dora Luz no laboraba y que quien veía por su sustento era su hijo Yeisson, situación que era de público conocimiento y que resulta coherente en el tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, lo cual resulta afín con lo manifestado por la demandante DORA LUZ YEPES HERNÁNDEZ en el interrogatorio, en el que indicó que su casa es muy grande, viviendo en la parte de adelante sus hijas con sus familias, y atrás como en un apartamentico, vivía ella con su hijo Yeisson, quien era el único que le aportaba para todos sus gastos, ya que sus otros 4 hijos tenían sus obligaciones. Contó que se casó con el señor Leopoldo de quien se separó porque tuvieron muchos problemas. Dice que en vida de su hijo Yeisson, vivía con Leopoldo quién también le colaboraba, pero prácticamente para el sustento de los gastos personales, pues le daba muy poquito, porque él decía que para eso tenía a su hijo,

siendo muy mala la relación de su cónyuge con sus hijos. Dice que, al momento del fallecimiento de su hijo, él trabajaba como administrador en una taberna y vendía Jeans, dándole a ella para el sostenimiento entre \$200.000 o \$300.000 quincenales, además de que le compraba ropa y zapatos, sin saber con precisión cuánto se ganaba su hijo en el último año; dijo que los servicios en su casa se dividían, entre los que vivían en la casa. Finalizó contando que su hijo la sostenía porque su cónyuge la humillaba y a su hijo eso le dolía mucho, así que con el deceso de su hijo su calidad de vida cambio demasiado, se ve muchas veces sin pasajes para ir donde el médico y con dificultad para comprar hasta el medicamento, tampoco puede salir como lo hacía antes, ni llevar su dieta alimenticia que es por motivos de salud, ni darse un lujito.

Pues bien, examinadas las pruebas allegadas coincide la Sala con los argumentos contenidos en la sentencia de primer grado, y es que ciertamente se lograron acreditar los elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional y especializada para demostrar la dependencia económica de la madre frente a su descendiente, pues no existe duda que ésta no era autosuficiente económicamente para la época del fallecimiento de su descendiente, encontrándose subordinada económicamente, pues si bien como se dijo para ese entonces la accionante era casada, su cónyuge era poco lo que aportaba para su sustento, y si bien tenía otros 4 hijos, se infiere de la prueba que estos tenían sus grupos familiares, sin que les fuera posible ayudarle a la accionante.

Así las cosas, no comparte esta Corporación la tesis esbozada por el fondo privado, en cuanto a que el apoyo suministrado por el afiliado no era representativo para los gastos de la demandante, a sabiendas que quedo plenamente acreditado que el auxilio entregado por el causante, sí hacía parte vital para la manutención de la madre, ya que era un aporte periódico que oscilaba entre \$250.000 y 300.000 mensuales, más los gastos propios del hogar como servicio o alimentación, razón por la cual la señora Yepes Hernández con el deceso de su hijo, vio afectado su mínimo vital en un grado significativo.

En ese orden de ideas, se concluye que claramente se presentó un sometimiento al auxilio recibido del hijo, que no le permite a su ascendiente,

al ser suprimido, llevar una vida digna o con autosuficiencia económica, imponiéndose la confirmación de la decisión recurrida.

Ahora en cuanto al disfrute de la prestación, como quedo definido por la a quo, el derecho a la pensión de sobreviviente se consolido desde el 20 de septiembre de 2016, sobre la base de 13 mesadas anuales, toda vez que el derecho se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011 (parágrafo 6 del acto legislativo 001 de 2005), condena que se extiende de en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 283 del CGP, hasta el 31 de mayo de 2022, lo que nos arroja un retroactivo de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$61´721.552), debiéndose descontar lo pagado a la demandante por devolución de saldos, según se desprende del comunicado del mes de octubre de 2015.

AÑO	SALARIO	MESADAS	TOTALES
2016	\$689.454	4 meses y 10 días	\$2´987.300
2017	\$737.717	13	\$9´590.321
2018	\$781.242	13	\$10´156.146
2019	\$828.116	13	\$10´765.508
2020	\$ 877.803	13	\$11´411.439
2021	\$908.526	13	\$11´810.838
2022	\$1.000.000	5	\$5´000.000
TOTAL			\$61´721.552

A partir del 1 de junio de 2.022, la accionada pagará a la demandante una mesada de \$1´000.000, con la mesada adicional de diciembre y los ajustes que a futuro decreta el Gobierno Nacional.

Del retroactivo pensional liquidado debe descontarse las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud, en atención a los artículos 157 y 203 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 806 de 1998 y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia *SL 7061-2016 de mayo 18 de 2016*.

3.4.1 INTERESES MORATORIOS

Sobre los intereses de mora deprecados, debe partirse del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, el cual establece que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales o el no pago de mesadas dentro del plazo previsto en la ley para el otorgamiento de la pensión, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y

sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago.

Para determinar la procedencia de dicho gravamen, dada su naturaleza resarcitoria, debe analizarse la conducta de la administradora en el retardo o negación del reconocimiento o pago de la pensión, ya que, en el evento de demostrarse que su proceder tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación, su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin el alcance que puedan darle los jueces, sin intervención de situación que le son imposibles de predecir, o cuando el reconocimiento de la pensión obedece a la creación de criterio jurisprudencial, debe exonerársele de los intereses de mora (SL704 de 2013, SL7893-2015 y SL2786 de 2020).

Bajo las anteriores previsiones, se tiene que Protección S.A. tiene a su cargo los intereses moratorios condenados, ya que no se infiere mayor análisis para concluir la improcedencia del reconocimiento pensional, pues la entidad se limitó a advertir en el comunicado que no se logró establecer la dependencia económica de la señora Dora Luz respecto de su hijo Yeisson Martínez, así que la negativa del derecho no puede entenderse originada de la aplicación estricta de la ley, ni es producto de la interpretación judicial o jurisprudencial, lo que constituye en acertada la condena que en este aspecto se emitió, a partir del 21 de noviembre de 2019, esto es, transcurridos 2 meses a partir de la reclamación con los que cuenta la entidad para resolver el derecho pensional por el riesgo de muerte –artículo 1º ley 717 de 2001- y hasta el pago efectivo de la obligación, confirmándose este punto.

Colofón de lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia, modificando el retroactivo pensional.

Costas de segunda instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1'000.000.

4. FALLO DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

PRIMERO: Se **MODIFICA** el valor del retroactivo liquidado desde el 20 de septiembre de 2016 hasta la mesada de mayo de 2022, inclusive, adeudado a **DORA LUZ YEPES HERNÁNDEZ**, la suma de SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$61'721.552).

SEGUNDO: En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia recurrida.

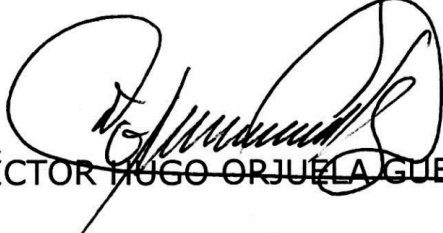
TERCERO: Costas de segunda instancia a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1'000.000.

Lo decidido se notifica por EDICTO.

Los Magistrados,



JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE